

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

Medellín, veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez quien actúa como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso ordinario radicado con el número 05001310501320150096401, promovido por el señor **JORGE ALBERTO ESCOBAR** en contra de **MATILDE VÉLEZ CORREA**, con la finalidad de revisar en consulta la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

De conformidad con el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de

la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...” se toma la decisión correspondiente mediante acta número **190**, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

ANTECEDENTES

El señor Jorge Alberto Escobar instauró acción judicial, solicitando la declaratoria de una relación laboral desde el mes de febrero del año 1999 con la pasiva, peticionando el pago de las prestaciones sociales, la declaratoria de terminación de la relación laboral de manera injusta con la indemnización a la que hay lugar, así como aquella consagrada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 por encontrarse en estado de incapacidad laboral con la indexación debida. Igualmente, el pago de la pensión de invalidez ante la omisión de afiliación y pago de los aportes respectivos, costas y gastos del proceso.

Como fundamento fáctico expuso que, la demandada es propietaria de un predio rural en el Municipio de Ciudad Bolívar, en donde se produce artesanalmente panela de caña de azúcar. Desde el 1 de febrero del año 1999 los unió un contrato de trabajo verbal, para “oficios varios” y conductor del vehículo con placas TNE 278 destinado al transporte de los productos de la finca, tales como panela, café y los insumos de la producción agrícola. Narró que el horario era desde las cinco de la mañana hasta las cuatro de la tarde con una remuneración ligeramente superior al mínimo y se efectuaba de manera semanal. No fue afiliado en salud, pensiones ni riesgos laborales. Explicó que para los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 se le consignó en el Fondo de Cesantías Protección algunos valores. Relató que al sentir deteriorada su salud, acudió ante la EPS en calidad de beneficiario de su hija, en

donde se consideró necesario iniciar tratamiento quirúrgico para el restablecimiento de su salud, cuya secuela fue la pérdida de visión en ambos ojos. Finalmente indicó que, ante la imposibilidad de continuar conduciendo el vehículo, la demandada le canceló hasta el 31 de mayo de 2011 el pago mensual del salario mínimo, pero desde dicha fecha se negó a realizarle más pagos terminando la relación laboral, sin que el demandante contara con la posibilidad de acceder a los beneficios del sistema general en pensiones.

Admitida la demanda, se notificó a la demandada quien expuso en término oportuno:

Negó la existencia de relación laboral alguna con el actor, y resaltó que la finca descrita es de propiedad de otras personas más. Narró que el demandante era propietario de una volqueta en el que hacía varios servicios a fincas y personas de la región, y en el año 2011 ofreció sus servicios para manejar por prestación de servicios el vehículo de propiedad de las señoras Luz Amparo y Rosa Helena Vélez Correa, quienes, a su vez, lo facilitaban para efectuar algunas diligencias al interior de la Finca la Cascadita, incluso, el vehículo fue alquilado para algunas obras en el Municipio de Medellín. Aceptó que se le realizaron algunos pagos al actor en un fondo de cesantías, pero que ello, se debió al propósito de colaborarle económicamente. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones e invoco las excepciones de: *“Prescripción”, “Falta de causa para pedir e inexistencia del vínculo laboral”, “Buena fe de la demandada y mala fe del demandante”, “Pago”, “Compensación”, “Ausencia del vínculo laboral”, “Imposibilidad física del demandante para desempeñarse como conductor”*

El apoderado de la parte actora puso en conocimiento el fallecimiento del señor Jorge Alberto Escobar el 16 de diciembre del año 2016.

En sentencia proferida el cinco (5) de julio del año dos mil dieciocho (2018) el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, absolvió a la accionada de las pretensiones invocadas en su contra.

Fundamentó su decisión en que no se logró determinar en el proceso la existencia de los elementos determinantes de la existencia de la relación laboral.

PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico de esta instancia, consiste en determinar la existencia de la relación laboral entre las partes, de haber existido, sus extremos, las causas de su fenecimiento, si se adeudan conceptos laborales, si el demandante se encontraba bajo la protección de la estabilidad laboral reforzada y si hay mérito para ordenar el reconocimiento de la pensión de invalidez de origen común por parte de la empleadora.

CONSIDERACIONES

El artículo 164 del Código General del Proceso establece que toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Y el artículo 167 ibídem consagra el principio de la carga de la prueba que se explica afirmando que al actor le corresponde demostrar los supuestos fácticos en los cuales funda su pretensión y al demandado los hechos en que finca la excepción.

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en diversas oportunidades sobre el principio universal de la carga probatoria, y ha explicado con claridad, que quien afirma una cosa está obligado a probarla. Es, así pues, como quien pretende o demanda un derecho debe alegarlo; y adicionalmente,

debe demostrar los hechos que lo gestan o aquellos en que se funda, desplazándose la carga de la prueba al demandado cuando éste se opone o excepciona, aduciendo en su defensa hechos que requieren igualmente de su comprobación, debiendo desvirtuar la prueba que el actor haya aportado como soporte de los supuestos fácticos propios de la tutela jurídica efectiva del derecho reclamado. (Sentencia de 5 de agosto de 2009, Expediente 36.549).

El contrato de trabajo, es un acuerdo celebrado entre dos partes, una de ellas denominada trabajador y otra empleadora, donde el primero presta personalmente sus servicios orientado bajo la subordinación hacia el segundo, y recibiendo una contraprestación denominada salario.

En aras de equilibrar la relación desigual entre las partes consecuente al poder subordinante del empleador, el legislador, consagró un mínimo de derechos y garantías, que propenden por el respeto a la dignidad del trabajador.

Para ello, en el Código Sustantivo de Trabajo, delimitó tres elementos para diferenciar el contrato de trabajo de otros que pudiera darse en el desarrollo de las relaciones humanas, así:

“ARTICULO 23. ELEMENTOS ESENCIALES.

1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos esenciales:

a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;

b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país; y

c. Un salario como retribución del servicio.

2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen.”

Igualmente, en el artículo 24 ibídem expuso lo siguiente:

“Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo.”

Es así como mínimamente, el trabajador, debe acreditar en el marco del proceso judicial, la prestación personal del servicio a favor de la demandada la cual, definida en el artículo 5 del C.S.T., se trata de cualquier oficio, material o intelectual, desempeñado necesariamente por una persona natural. Es este punto el elemento diferenciador pues la prestación del servicio siempre debe ejecutarse por el trabajador de manera personalísima, sin que sea posible la sustitución de trabajadores; pues si se presenta lo contrario, será la prestación de un servicio, pero éste no será de naturaleza personal. Finalmente, dicha actividad debe beneficiar a un empleador.

A propósito de la subordinación, es el sometimiento del trabajador a la esfera organicista, rectora y disciplinaria del empleador, donde la obediencia es la premisa principal, siendo este elemento diferenciador de otro tipo de contrataciones, pues se caracteriza por ser irrenunciable e intransmisible.

La subordinación propia de las relaciones laborales es personal, pues el trabajador se somete a la persona del empleador, quien tiene la potestad para dar órdenes directas, implementar horarios y reglamentos internos, exigir permisos para ausentarse del lugar de trabajo, impartir sanciones disciplinarias ante el

incumplimiento de las obligaciones contractuales, entre otras, a diferencia de los contratos de índole civil, comercial o administrativo, donde los contratantes se someten al cumplimiento de las obligaciones contraídas, y no a las personas.

Es importante recordar, que la doctrina ha reconocido ciertos indicios que pueden dar lugar a deducir la materialización de una relación laboral, tales como las condiciones locativas de la prestación del servicio, que generalmente serían dentro de la esfera del empleador; la existencia de un horario de trabajo; la ajenidad de los productos y los bienes producidos.

Finalmente, pero no menos importante, el servicio personal debe ser remunerado con una asignación que es pactada entre los contratantes y que tiene como fin retribuir la fuerza laboral impartida por el trabajador ante el empleador.

El beneficio probatorio que tiene el empleado como extremo vulnerable de la relación contractual, y que es por esta especialidad amparado, no le quita otro tipo de obligaciones procesales y probatorias, es decir, no basta con acreditar sólo la prestación personal del servicio para que se derive inevitablemente la prosperidad de sus pretensiones, sino que, también recae en él la obligación de crear certeza sobre los extremos de la relación laboral que se endilga y respecto a quién.

Lo anterior, puesto que, la presunción del artículo 24 del C.S.T. al ser legal puede ser desvirtuada con la demostración del hecho contrario al presumido. Es decir, que el servicio no se prestó bajo un régimen contractual laboral porque quien lo ejecutó no lo hizo con el ánimo de que se le retribuyera, o en cumplimiento de una obligación que le impusiera dependencia o subordinación; es decir, si se acredita que fue totalmente autónoma e independiente, así debe declararse (sentencia de 1 de julio de 2009 – Radicado 30.437).

Contrario sensu, una vez generada la certeza sobre la prestación personal del servicio a su favor, le asiste la carga probatoria a la pasiva, si se niega a lo pretendido, de demostrar que dicha labor fue autónoma, independiente y no subordinada.

La Sala recuerda las voces de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral en sentencia SL 888 de 2023 al respecto:

“Pues bien, en relación con los elementos indicativos de la existencia del contrato de trabajo ha señalado la Sala que el contrato de prestación de servicios se caracteriza por la independencia o autonomía que tiene el contratista para ejecutar la labor convenida con el contratante. Esta característica, en principio, debe eximir a quien presta los servicios especializados de recibir órdenes para el desarrollo de las actividades contratadas (CSJ SL3126-2021).

Así también se ha dicho que en este tipo de contratación no están prohibidas las instrucciones o directrices en la ejecución del servicio, pues «naturalmente al beneficiario de éstos le asiste el derecho de exigir el cumplimiento cabal de la obligación a cargo del prestador» Es así como es factible que en función de una adecuada coordinación se puedan fijar horarios, solicitar informes e incluso establecer medidas de supervisión o vigilancia sobre esas mismas obligaciones. Sin embargo, dichas acciones no pueden en modo alguno desbordar su finalidad al punto de convertir tal coordinación en la subordinación propia del contrato de trabajo (CSJ SL3126-2021). “

Allegado como documental se observa copia de la tarjeta de propiedad del vehículo en la que se plantea se prestó el servicio, placas TNE 278 en donde se observa que

los propietarios son Luz A. y Rosa H. Vélez Correa, personas diferentes a la demandada.

Se constata del dictamen de pérdida de capacidad laboral número 37865 del 22/09/2011 realizado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, que, el demandante desde el año 2005 perdió totalmente su agudeza visual, como consecuencia de la resección de un tumor benigno cerebral y no volvió a laborar, con lo que, los pagos efectuados en el fondo de pensiones Protección SA por los años 2005, 2006, 2007, 2008 no son consecuencia de una actividad laboral.

Dentro de la audiencia del artículo 80 del CPT Y SS, se recibió la prueba testimonial en la que se colige:

Elías Pulgarín Gutiérrez: Conoció al demandante porque él le ofrecía panela para comprar que venía de la finca “La Cascadita”, compraba el producto cada 8 días, frijoles y panela. Expuso que el demandante le indicó que su empleadora era la señora Matilde Correa. Indicó que iba a montar bicicleta y lo veía cada ocho días más o menos en la finca laborando. “Se imagina” que la dueña de la finca y empleadora era la señora Matilde Vélez Correa. Los conocimientos de sus dichos devienen de lo que el actor le comentó. Enunció que el actor nunca tuvo problemas de salud y que se enfermó como consecuencia de un golpe en la cabeza y debido a eso quedo muy ciego.

José Javier Pulgarín Martínez: conoció al demandante porque hacía unos viajes con una volqueta, se le contrataba para que moviera la panela o café y se le pagaba el viaje. Esa frecuencia de panela era cuando hubiera molienda, cada ocho días y de café era una vez al año. No realizaba ninguna otra labor. Es el encargado de la

finca desde el año 2004. No conoció que el demandante que realizara otra labor, pero tiene entendido que realizaba viajes a otras fincas. La señora Matilde era la que llamaba al actor para que realizara los viajes. El actor no permanecía en la finca, pues diferente a los días que iba por carga no subía a la finca. Explicó que después de la cirugía cerebral el señor Escobar no pudo volver a prestar los servicios.

Se recepcionó el interrogatorio de la demandada la cual, se revisa bajo el marco del artículo 191 del CGP y de la que se colige:

Al demandante se le pagaban viajes esporádicos con la volqueta para llevar panela al pueblo y se le pagaba por ello, la volqueta no es de su propiedad. El pago se lo efectuaba el mayordomo. Realizó unos pagos al demandante para que él tuviera un ahorro pues el actor le indicó que tenía un tumor de nacimiento. El demandante le comentó que en razón de su cirugía no podía hacer los viajes. Los viajes que hacía el actor con la volqueta fue durante año y medio y se hacía cada quince días más o menos. El valor lo determinaba el demandante.

Ahora, la sentencia SU 129 del año 2021 respecto a las reglas para la apreciación de la testimonial, explicó:

“Finalmente, respecto de la forma en que debe valorarse la prueba testimonial, los Códigos de Procedimiento Civil y Procesal del Trabajo establecen dos reglas en particular. (i) Siendo necesario procurar un mínimo de objetividad en el testimonio, la ley impone al juez el deber de interrogar a la persona sobre “la razón de la ciencia de su dicho con explicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que haya ocurrido cada hecho y de la forma como llegó a su conocimiento [...]”¹⁰¹. La respuesta que se dé a esa pregunta también habrá de estudiarse. Por último, (ii) el Código Procesal del Trabajo resalta que, recabados todos los medios de prueba (incluidos los testimonios), el juez debe analizarlos en conjunto y

definir si con ellos es posible llegar al convencimiento de los hechos ocurridos. Todo esto “inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes”.

De acuerdo a las explicaciones dadas por el máximo órgano constitucional, no basta con escuchar los dichos del testigo, sino, indagar las razones de ello, es decir, de dónde se extrae su conocimiento, para así, delimitar la certeza de lo que se expone, pues más allá de querer beneficiar a la parte que la convoca al proceso, debe reproducir aquellos hechos que presencié con la naturalidad propia de quien invoca aquello que se quedó en su memoria episódica.

El testigo de oídas es aquel indirectos, o de referencia, es decir, que NO PERCIBIÓ CON SUS PROPIOS SENTIDOS el hecho sobre el cual declara su existencia, sino que lo ha escuchado u oído de otra persona.

Considera la Sala que el testimonio del señor Pulgarín Gutiérrez, valorado como elemento probatorio, arroja exposiciones que no presencié de manera directa, sino, que se basó en los dichos del demandante, narraciones que el señor Escobar le comentaba cada que llevaba algunos insumos como café o panela, pues no es posible que ello fuera con la habitualidad que se invoca por el testigo, ya que los insumos que se comercializaban de la finca eran, café y panela, el primero con cosecha cada año y el segundo cada ocho o quince días. Incluso, en su narrativa se denoto antipatía para con la señora Matilde Vélez Correa.

El testigo Pulgarín Martínez, por el contrario, empleado que prestaba los servicios de manera permanente en la finca “la cascadita”, pudo aclarar que el actor si era llamado para el acarreo de aquello que se producía en la finca, pero que no

permanecía en las instalaciones de ésta, sólo prestaba un servicio que era pagado a la finalización de cada viaje, constándole de mera personal y directa ello, pues precisamente en su condición de administrador de la finca tuvo contacto con dicha situación.

La demandada en el interrogatorio de parte, no negó en ningún momento que el actor le prestó servicio en algunas oportunidades, incluso fue clara en expresar que, ante la manifestación del actor de no tener ahorro alguno y la exposición de la enfermedad, decidió apoyarlo económicamente.

Teniendo en cuenta lo anterior, considera la Sala que si bien se prueba la prestación personal de un servicio, pues la misma demandada lo aceptó, indicando que le pagaba para llevar algunas cosechas, también lo es que se realizaba de manera no habitual, sólo para esa labor, que la prestación del servicio no era a razón del demandante, sino, que cualquier otra persona podría hacerlo, siendo esporádica, independiente, bajo su propia cuenta y riesgo, y sin elementos de propiedad de la pasiva, por tanto estaba ausente el elemento continuada subordinación establecida en el artículo 23 del estatuto del trabajo.

Es, así pues, como esta Sala se acoge a las conclusiones dadas por la *a quo*, en orden a que no se logró generar certeza sobre la relación laboral que se pretendió imponer en hombros de la demandada.

Corolario a lo expuesto, no se cumplió con la carga probatoria referida, y ante la inexistencia de la relación laboral cuya declaratoria fue pretendida, la totalidad de pretensiones se despachan desfavorablemente, confirmando la decisión absolutoria que se revisa en consulta.

05001310501320150096401

Sin costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión que se revisa en consulta, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

TERCERO: Lo resuelto se notifica por **EDICTO**. Se ordena regresar el expediente al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

Firmado Por:

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **bc358709459734902f8d9616a1952299db6c73ee23322ab05be49b1fa5c13647**

Documento generado en 22/06/2023 03:24:58 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>